

Candidaturas independientes desde la perspectiva de los derechos humanos

Independent candidacies from the perspective of the human rights

María Teresa Villarreal Martínez
Doctora en Política Pública, SNI-1
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Autónoma de Nuevo León
tereima@yahoo.com

Introducción

En el proceso electoral 2017-2018 se afianzó la figura de la candidatura independiente que ya había sido estrenada a nivel federal en 2015 –y en años anteriores en algunos comicios estatales-, pero que en esta ocasión se puso en práctica también para la elección presidencial. La incorporación de esta figura en la Constitución federal en 2012 reconoce el derecho de los ciudadanos a ser votados, de manera que el marco legal mexicano se alineó con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Ley Suprema que rige al país.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, los Estados están obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, y para ello han de crear marcos legales, diseñar e implementar políticas y acciones que hagan realidad la universalidad de esos derechos sin discriminación alguna, los hagan justiciables y se amplíen progresivamente, teniendo en cuenta la accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de esos derechos, promoviendo la participación así como la transparencia y rendición de cuentas. Estos principios y estrategias son los criterios que permiten dar cuenta del cumplimiento del marco internacional de derechos humanos al analizar legislaciones y políticas públicas concretas.

En este trabajo se revisan los incentivos y limitaciones que persisten al implementar medidas relacionadas con el ejercicio del derecho a ser votado, tomando como base empírica la experiencia de Nuevo León en el reciente proceso electoral, donde se renovó el Congreso local y los 51 ayuntamientos de la entidad. Los requisitos para el registro, el financiamiento, la campaña y los votos conseguidos, son los aspectos que se toman en cuenta para valorar la accesibilidad,

disponibilidad, adaptabilidad y no discriminación de los dispositivos encaminados a la puesta en práctica del derecho a ser votado para quienes optaron por la vía no partidista.

Las candidaturas independientes en México

En México, la lucha por el derecho a ser votado sin necesidad de ser postulado por un partido político tiene una historia reciente desarrollada sobre todo entre la última década del siglo pasado y la primera década del actual siglo XXI. Su culminación ocurrió a partir de 2012 con la inclusión en el texto constitucional del reconocimiento del derecho para toda la ciudadanía a ser votado, quitando así a los partidos políticos la atribución exclusiva de presentar candidaturas en los procesos electorales. La puesta en práctica de la reforma constitucional de 2012 ocurrió a nivel nacional a partir de los comicios de 2015, una vez que un año antes el Congreso de la Unión aprobó la reforma electoral que incluye las candidaturas independientes en la legislación secundaria, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE.

Quizá es poco conocido que la prohibición de las candidaturas fuera de los partidos políticos data de 1946, cuando el entonces presidente Manuel Ávila Camacho promulgó y publicó la Ley Electoral que en el artículo 60 estableció que “Solamente los partidos podrán registrar candidatos”. Es decir, que antes de esa fecha, la legislación mexicana no se exigía como requisito que la postulación de una candidatura fuera presentada necesariamente por un partido político, por lo que las candidaturas independientes estaban permitidas.

Aunque en los años 90 del siglo XX en varias entidades grupos civiles impulsaron infructuosamente proyectos legales para permitir las candidaturas independientes, la lucha legal que suele referenciarse es la que encabezó en 2004 Jorge Castañeda, luego que el Instituto Federal Electoral le negara el registro como candidato independiente a la Presidencia de la República, los tribunales le negaran un amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyera un recurso de revisión sobre ese amparo negado. La batalla legal culminó en 2008 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoIDH, recomendó al Estado mexicano que ajustara los marcos legales para garantizar que los ciudadanos puedan cuestionar de manera efectiva la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido, sin embargo la CoIDH

determinó que el Estado mexicano no había violado el derecho a ser votado (CoIDH, 6 de agosto de 2008). Aun así, esta contienda legal y la presión de grupos civiles en distintas partes del país condujo en 2012 al reconocimiento en la Constitución del derecho a ser votado, quitando la exclusividad de esa prerrogativa a los partidos. De esta forma, el Estado mexicano dio cumplimiento a su obligación de reconocer sin restricciones indebidas el derecho de todo ciudadano de “votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, tal como le establece el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Como ya se indicó, hasta 2014 se aprobó la legislación secundaria que regula el ejercicio del derecho a ser votado sin necesidad de ser registrado por un partido. Esta norma se puso en práctica a nivel nacional en el proceso electoral de 2015 en todos los cargos federales y locales excepto la presidencia y las senadurías, y en los comicios de 2018 por primera vez se utilizó la figura de candidatura independiente para aspirar al Senado y a la Presidencia de la República.

Luego de este breve recorrido histórico del reconocimiento del derecho a ser votado, presentamos a continuación los antecedentes de las candidaturas independientes en el caso específico de Nuevo León.

La demanda por candidaturas independientes en Nuevo León

La primera referencia acerca de la exigencia de respetar el derecho a ser votado en Nuevo León data de 1985, cuando la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo¹ presentó en el Congreso una iniciativa de ley electoral en la que demandaba “la integración de autoridades electorales independientes; la existencia de padrón confiable y credencial con fotografía; imposición de sanciones a delincuentes electorales; permitir de forma equitativa el acceso a medios y candidaturas independientes” (Medellín, 2008:255).

¹ Organización creada el 31 de julio de 1985 por militantes panistas y también por no panistas, luego de las movilizaciones por la defensa del voto tras las elecciones de ese año a la gubernatura, en las que el candidato panista Fernando Canales alegó fraude.

En 1993, la Red por la Democracia² presentó el 2 de febrero al Congreso del Estado una Iniciativa de Ley Estatal Electoral con 224 artículos, en la que proponía las candidaturas independientes, y también incluía la ciudadanización del órgano electoral local –la Comisión Estatal Electoral-, y la designación de funcionarios de las mesas directivas de casilla mediante sorteo. Entre abril y mayo de ese mismo año, la Red por la Democracia participó en los foros de consulta ciudadana organizados por el Congreso local para abordar la reforma electoral que estaba en discusión ese año. La iniciativa de la Red no prosperó del todo, la ley electoral aprobada por el Congreso de Nuevo León en 1993 no incluyó las candidaturas independientes, pero sí contempló la ciudadanización del órgano electoral y la insaculación de ciudadanos para ser funcionarios de casilla.

En 1996, el 29 de septiembre, Alianza Cívica Nuevo León³ organizó un Foro de análisis sobre la nueva legislación electoral del Estado, en donde los participantes abordaron los temas de conformación de organismos electorales, financiamiento y topes de campaña, lo contencioso electoral, delitos electorales, observadores electorales, coaliciones, y candidaturas independientes. La sistematización de las propuestas vertidas en ese Foro se entregó al Congreso local el 2 de diciembre de ese año, pues se discutía una reforma a la ley electoral. Sin embargo, en los cambios aprobados por los legisladores no se incluyeron las candidaturas independientes.

En 1998, el Congreso estatal organizó el Foro de consulta para la reforma de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, Alianza Cívica presentó una ponencia en la que señaló lo siguiente:

... la legislación electoral es excluyente al negar a millones de mexicanos el derecho a ser candidatos a puestos de elección popular, al establecer el COFIPE y le LEENL que es derecho exclusivo de los partidos el derecho de registrar candidatos.

² La Red por la Democracia se formó el 14 de noviembre de 1992 y agrupaba organizaciones civiles como Promotores Populares de Monterrey “José Llaguno”, A. C., la Unión de Colonos y solicitantes de Terrenos “Avance Popular” de García N. L., colectivos de saludo popular de las colonias Canteras y Niño Artillero, Servicios Sociales Solidarios “Ymelda Tijerina”, el Grupo de Teatro Popular “Ventana Abierta”, el Centro de Estudios Regionales de Linares, el Grupo de los 500, el Comité Independiente Zertuche, y el equipo promotor de Pastoral Social de la parroquia Cruz del Apostolado de la colonia San Miguel. Además se integraron varias personas en lo particular. (Promotores Populares de Monterrey “José Llaguno”; A. C. 31 de marzo de 1993, Informe de actividades. Documento no publicado).

³ Agrupación creada en abril de 1994 en Nuevo León, formando parte de la red nacional de Alianza Cívica que se formó ese año en torno a la observación del proceso electoral presidencial de entonces.

... que en la Ley Estatal de DH se establezca que la CEDH conozca de aquellos casos en los que se viole el derecho ciudadano a ser elegido (Alianza Cívica Nuevo León, 1998).

Esta propuesta también se quedó solamente en las memorias del Foro, y no pasó a la discusión legislativa.

En 2004, el gobierno estatal organizó una Mesa Central de Diálogo Político para tratar de consensar la reforma a la legislación electoral con la participaron partidos políticos; sin embargo, luego de varias sesiones, la oposición abandonó ese espacio y conformó una mesa alterna con organizaciones civiles como el Foro Libre y Democrático. En la mesa alterna se incluyeron las candidaturas independientes, y se logró que fueran aprobadas en primera vuelta por el pleno del Congreso como parte de la reforma electoral, sin embargo no se logró el número de votos suficientes en la segunda vuelta (Medellín, 2008:258).

La inclusión de las candidaturas independientes en la Constitución de Nuevo León y la legislación electoral local ocurrió finalmente en 2013 y 2014, obedeció al ritmo marcado por las reformas a nivel federal. Después de que el 8 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, la reforma al artículo 35 fracción II de la Constitución federal para reconocer el derecho de los ciudadanos a registrarse como candidatos independientemente de los partidos políticos, los congresos estatales aprobaron reformas a las respectivas constituciones locales para incluir también las candidaturas independientes. En Nuevo León, esta reforma constitucional se aprobó el 23 de septiembre de 2013 y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 16 de octubre de ese mismo año. La fracción II de artículo 35 de la Constitución de Nuevo León quedó redactado de la misma forma que en la constitución federal:

Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

En cuanto a la legislación secundaria, la nueva la Ley Estatal Electoral que regula las candidaturas independientes se aprobó y publicó el 08 de julio de 2014, luego de que a nivel federal se publicara

la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el 23 de mayo de ese mismo año, la cual regula también la figura de candidaturas independientes.

Las trabas a las candidaturas independientes.

Sin embargo, lo que la reforma constitucional de 2012 garantizó quedó acotado y limitado con la reforma electoral de 2014 al reglamentarse las candidaturas independientes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, y en las leyes electorales estatales. Esta limitación se evidencia al menos en dos aspectos: la no participación de candidatos independientes en los cargos de elección popular por el principio de representación proporcional para conformar los órganos legislativos, y la cantidad de apoyos ciudadanos que se exige que los aspirantes obtengan para poder registrarse como candidatos independientes.

a. Los requisitos del ley

La legislación secundaria impone una serie de requisitos que deben cumplir los ciudadanos que buscan registrarse como candidatos independientes. La condición que ha resultado más difícil de cumplir en la práctica es la referente a la cantidad de apoyos ciudadanos que deben obtener los aspirantes. En el artículo 371 de la LEGIPE se indica la cantidad de firmas que los aspirantes deben obtener y el periodo de tiempo con que cuentan para lograrlo, estos requisitos aparecen en la Tabla 1, y se contrastan con los requerimientos de número mínimo de afiliados necesario para registrar un partido político nacional. Se hace esta comparación porque un partido político es la otra vía posible para registrar candidaturas, pero para ello primero debe obtener su registro reuniendo un número mínimo de militantes. La Ley General de Partidos Políticos, LGPP, establece en el artículo 10 numeral 2 inciso b, que para registrar un partido político nacional se requiere:

...contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso;
bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Para registrar un partido político estatal, la misma ley señala en el artículo 10 numeral 2 inciso c como requisito:

...contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Los requisitos anteriores deberán cumplirse en el lapso de un año, contado del enero del año siguiente a la última elección presidencial o de gobernador –según se trate de partido nacional o estatal- celebrada a enero del año anterior a la siguiente elección federal o estatal.

A continuación presentamos dos tablas en las que comparamos los requisitos de apoyos ciudadanos para aspirantes a candidaturas independientes y de número de afiliados para registrar partidos políticos. La Tabla 1 se refiere al ámbito federal y la Tabla 2 al ámbito estatal, específicamente de Nuevo León.

Tabla 1. Requisitos para el registro de partidos político nacional y para el registro de candidaturas independientes en elecciones federales.

	Requisito mínimo	Total de firmas/apoyos ciudadanos/respaldos ciudadanos	Plazo para cumplir el requisito
Nuevo partido político nacional	0.26% padrón nacional última elección. Padrón: 87,244,921	226,837 Distribución mínima: 3mil en 20 entidades; 300 en 200 distritos.	Un año.
CI Presidente	1% Lista Nominal nacional 31 agosto año previo (LEGIPE 371) Lista Nominal: 86,659,234	866,593 Distribución mínima: 1% en 17 entidades	120 días
CI Senador	2% Lista Nominal estatal 31 agosto año previo. Lista Nominal Nuevo León: 3,780,344	75,607 Distribución mínima: 1% en la mitad de distritos	90 días

CI Diputado Federal	2% Lista Nominal Distrital 31 agosto previo	6,497	60 días
	Lista Nominal distrito XI Nuevo León: 324,847	Distribución mínima: 1% en la mitad de secciones	

Elaboración propia.

Tabla 2. Requisitos para registrar partido político estatal y candidaturas independientes en elecciones estatales –Nuevo León.

	Requisito mínimo	Total de firmas/apoyos ciudadanos/respaldos ciudadanos	Plazo para cumplir el requisito
Nuevo partido político estatal	0.26% padrón nacional última elección	9,257	Un año
	Padrón Nuevo León: 3,560,457	Distribución mínima: dos tercios de municipios	
CI Gobernador	*2% Lista Nominal estatal 30 septiembre previo (Ley Estatal Electoral 203)	78,178	50 días
	Lista Nominal Nuevo León*: 3,908,919	Distribución mínima: 1% en 26 municipios	
CI Diputado local	1% Lista Nominal distrital 30 septiembre previo	1,329	40 días
	Lista Nominal distrito XIII Nuevo León: 132,984	Distribución mínima: 1% en la mitad de secciones	
CI Ayuntamiento	% variado Lista Nominal municipal 30 septiembre previo	7,969	40 días
	Lista Nominal Guadalupe: 531,294	Distribución mínima: 2% en la mitad de secciones	
	Requisito: 1.5% de Lista Nominal en Guadalupe		

*Datos de 2015, cuando en Nuevo León se efectuaron elecciones de gobernador.

Elaboración propia.

Resulta evidente que hay más incentivos para la creación de partidos políticos que para el registro de candidaturas independientes. La mayor dificultad se encuentra en el caso de la candidatura a la Presidencia de la República, pues legislación actual ha vuelto inaccesible el ejercicio del derecho a ser candidato independiente para ese cargo para la gran mayoría de ciudadanos de a pie. Resulta extraño que a una persona que aspira a contender por ese cargo por la vía no partidaria le exijan que sea conocida en la mitad del país, en 17 entidades donde debe recabar apoyos ciudadanos, cuando para eso existe la etapa de campaña electoral, para que dé a conocer sus propuestas al

electorado en general. En este proceso de 2018 se pudo constatar que cumplir con el requisito legal de juntar una cantidad de firmas equivalente a al menos el 1 por ciento de la lista nominal de 17 entidades es prácticamente imposible lograrlo sin recurrir a mecanismos ilegales; además, la revisión de cada firma recolectada es una tarea titánica que ocupa mucho tiempo y atención de la autoridad electoral. El requisito de cientos de miles de firmas con cierta dispersión territorial nacional impide el acceso a millones de hombres y mujeres al ejercicio del derecho a ser votado por la vía no partidaria, por lo que el acceso a competir por la Presidencia de la República está en realidad reservado solo para unos cuantos.

En el ámbito local, en cambio, en los distritos locales y municipios parece que las reglas no surtieron un efecto tan obstaculizador. Por ejemplo, en Nuevo León, el 75 por ciento de los aspirantes -93 de 125- consiguieron el total de firmas requeridas para registrarse ya sea como candidatos a alguna diputación local o a algún ayuntamiento. Esto muestra que quienes se interesan por la política y desean participar en alguna candidatura, es más factible que sí sean conocidos en comunidades locales y puedan construir redes de apoyo en ese ámbito; pero exigir lo mismo a nivel nacional es muy difícil de cumplir para un ciudadano de a pie que aunque tenga participación en asuntos públicos, su incidencia se circunscribe al entorno inmediato, puesto que no cuenta con el respaldo de la estructura partidaria.

b) Representación proporcional

En 2012, se agregó al artículo 35 de la Constitución federal el derecho de todo ciudadano a “poder ser votado para todos los cargos de elección popular”, con lo que se quitó a los partidos políticos la exclusividad de participar con candidatos en los procesos electorales. Sin embargo, con la legislación secundaria aprobada en 2014, los candidatos independientes a diputados –federales y locales- y a senadores, solo pueden aspirar a ganar por el principio de mayoría relativa, pero no por representación proporcional, es decir, no tienen acceso a los cargos de representación proporcional; en cambio, los candidatos de partido sí, pueden ganar por mayoría una curul, o bien acceder a ella por el principio de representación proporcional. Por tanto, al voto de un elector por un candidato independiente a diputado o senador no se le reconoce el mismo valor y efecto que al voto de un elector por un candidato de partido. En México tenemos lo que se conoce como voto simultáneo

en las elecciones legislativas, al votar por una candidatura de mayoría ese sufragio tiene un efecto para determinar quién tiene la mayoría pero también para definir el reparto de las curules de representación proporcional. Pero esto no se aplica tratándose de candidatos independientes, si no obtienen votos suficientes para ganar de mayoría, ya no participan en el reparto de curules de representación proporcional por lo que esos votos también se quedan sin más efecto.

Por tanto es necesario ajustar la legislación para hacer posible que las candidaturas independientes que no ganen por mayoría una diputación o senaduría pero obtengan el umbral de votos que fije la ley, también participen en la conformación de los órganos legislativos por la vía de la representación proporcional. En este sentido ya se han hecho propuestas en diferentes partes del país, algunas son las siguientes:

- Tomar a los candidatos independientes como un partido, su voto en conjunto es el umbral de votación a considerar en el reparto. Esto se justifica porque de hecho se les toma a todos como partido en el reparto de recursos públicos y tiempos en medios electrónicos, y en el sorteo para participar en los debates.
- Que a cada candidato independiente se le trate como si fuera un partido unipersonal, por lo que presentan una lista que sólo contiene su nombre y obtiene en escaño si logra el umbral de votación requerido para el reparto de plurinominales. Un tratamiento similar se considera en la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en lo referente a candidaturas independientes, de acuerdo al artículo séptimo transitorio del Decreto de reforma a la Constitución federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.
- Sistema de prelación en listas ordenadas de manera decreciente con los candidatos uninominales perdedores más votados en una sola circunscripción territorial, poniendo límite de escaños por partido o fuerza política.

Las fórmulas de reparto pueden ser tantas como sea la capacidad creativa de los legisladores mientras exista voluntad política de respetar el derecho ciudadano de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y no solo para algunos, los de mayoría relativa. Además, se estaría respetando el principio de igualdad del sufragio, de manera que el voto por un candidato

independiente o por un candidato de partido pueda surtir los mismos efectos: coadyuvar a integrar el órgano legislativo tanto por la vía de mayoría como por la de representación proporcional.

Oportunidades y obstáculos para las candidaturas independientes

En el proceso electoral 2018, Nuevo León fue la entidad donde se registró el mayor número de candidaturas independientes a cargos federales y locales.

Tabla 3. Candidaturas independientes en los procesos electorales 2018 y 2015

Cargo de elección	1 de julio 2018				1 de junio 2015			
	Registrados		Ganadores		Registrados		Ganadores	
	Nacional	Solo Nuevo León	Nuevo León	Otros estados	Nacional	Solo Nuevo León	Nuevo León	Otros estados
Presidencia	1	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Senaduría (fórmulas)	7	1	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Diputación federal (fórmulas)	37	10	0	0	22	1	0	1
Gubernatura	4	N/A	0	N/A	3	1	1	0
Diputación local (fórmulas)	229	40	0	0	29	11	0	1
Ayuntamiento (planillas)	419	53	5	18	79	10	1	3

Elaboración propia con información de: TEPJF *Las candidaturas independientes en el proceso electoral 2014-2015* disponible en <http://portales.te.gob.mx/candidaturas-independientes/content/las-candidaturas-independientes-en-el-proceso-electoral-2014-2015>; INE *¡Candidatas y candidatos, conóceles!* disponible en <https://candidaturas.ine.mx/>; Diego Badillo e Itzel Zúñiga (14 de julio de 2018) “Mala jornada para candidatos independientes”, en *El Economista* disponible en <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mala-jornada-para-candidatos-independientes-20180714-0001.html>; Corona, Salvador (2 de julio de 2018) “Candidatos independientes no alcanzaron la votación necesaria”, en *El Economista* disponible en <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Candidatos-independientes-no-alcanzaron-la-votacion-necesaria-20180702-0148.html>

En 2016 y 2017 se llevaron a cabo también procesos electorales locales en algunas entidades federativas. En 2016 se registró un total de 308 candidaturas independientes, y solo nueve ganaron por mayoría en sendos ayuntamientos. En 2017 se registró un total de 270 candidatos sin partido y solo seis ganaron, tres de ellos un ayuntamiento y otros tres una regiduría –en Nayarít las regidurías son cargos de elección directa.

En el conjunto de procesos electorales efectuados entre 2015 y 2018, solamente hay un caso en que un candidato sin partido ha ganado una gubernatura, es el de Nuevo León en 2015 cuando ganó Jaime Rodríguez Calderón. En los cargos del orden federal, solamente un candidato ha ganado por la vía independiente, es el caso de Manuel Clouthier quien ganó una diputación federal en Sinaloa en 2015. Ninguna senaduría ha sido ganada por los independientes. En los congresos locales, solo en una ocasión un candidato sin partido ha ganado una diputación, es el caso de Pedro Kumamoto en 2015; en 2016 un independiente logró integrarse a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México pero no por mayoría sino por la vía proporcional –resto mayor. En cambio, en el ámbito municipal, los triunfos han ido aumentando: tres alcaldías en 2015, nueve en 2016, tres en 2017 – y además tres regidurías-, y 18 en 2018.

Para entender por qué las candidaturas independientes parecen tener más oportunidades en el ámbito local, hay que considerar que deben enfrentar condiciones adversas relacionadas con el financiamiento, el acceso a medios de comunicación y las oportunidades de participar en debates.

A partir del procesos electoral 2018 las candidaturas independientes pueden allegarse financiamiento privado hasta llegar al tope de gastos de campaña.⁴ Aunque esto podría liberar a los candidatos independientes de la atadura que la LEGIPE les fija al imponerles como límite solo un 10 por ciento de recursos privados, en realidad resulta difícil para ciudadanos sin partido obtener el favor de particulares para que le ayuden a pagar su campaña. Salvo el caso de Rodríguez Calderón en 2015 cuando ganó la gubernatura de Nuevo León y no quedó claro el origen y monto de los recursos utilizados en campaña, la mayoría de los candidatos independientes suelen tener limitadas fuentes privadas de recursos. Además deben enfrentar la complejidad de la contabilidad financiera y la fiscalización sin contar con un equipo profesional de apoyo permanente como podría ocurrir con los candidatos de partido.

Los candidatos independientes tienen también desigual oportunidad de exponer sus ideas de manera masiva, por la limitación legal relacionada con el acceso a medios de comunicación, para lo cual sí son considerados en conjunto como partido político. Este mismo esquema de trato partidista a los candidatos sin partido se repite a la hora de sortear quién participará en los debates,

⁴ Por parte del TEPJF TESIS XXI/2015, SUP-JDC 222/2018, por parte del TEE de Nuevo León J1-087/2018.

ya que en el caso de candidaturas a diputaciones, solo participa un candidato de cada partido y también uno solo de todos los independientes, a pesar de que después, a la hora de repartir curules por la vía de representación proporcional no se les considera en conjunto como partido político. Ante esta falta de equidad, en Nuevo León, dos candidatos sin partido impugnaron el Lineamiento emitido por el órgano electoral referente al sorteo de los participantes en el debate de candidatos al Congreso local. Rocío Maybe Montalvo Adame, candidata del distrito 14 y Benito Torres Escalante, candidato del distrito 9 presentaron sendos juicios de inconformidad ante el Tribunal Estatal Electoral –JI 107/2018 y JI 109/2018- para impugnar el sorteo mediante el cual solo un candidato independiente participaría en el debate en supuesta representación de los demás. El Tribunal les concedió la razón y ordenó al órgano electoral la realización de debates en los distritos de los agraviados con la participación de todos los contendientes.

Reflexiones finales

Luego de esta revisión del ejercicio a ser votado de manera independiente de los partidos políticos, queda claro que lo que la reforma constitucional de 2012 garantizó quedó acotado y limitado con la reforma electoral de 2014 al reglamentarse las candidaturas. La gran cantidad de apoyos ciudadanos requeridos en un periodo corto de tiempo imposibilita a muchos aspirantes cumplir con el requisito legal para poder registrarse como candidatos sin partido; esto los deja en un plano de desigualdad con respecto a candidatos de partido, pues pareciera que un independiente debe ser ampliamente reconocido aun antes de la campaña electoral; este requerimiento no se pide a las personas que son registradas en candidaturas partidarias. Además, la legislación secundaria no ha respetado del todo el derecho reconocido en la constitución para la ciudadanía, de “poder ser votados para todos los cargos de elección popular”, pues en la práctica no tienen acceso a las diputaciones y senadurías plurinominales ni de representación proporcional. Un caso excepcional es la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que trata a las fórmulas de candidaturas independientes como si cada una fuera un partido político con derecho al reparto proporcional, y de hecho este mecanismo permitió en 2016 que un candidato independiente entrara a conformar la Asamblea Constituyente por la vía del resto mayor. Por tanto, sí es posible diseñar marcos legales que permitan a candidaturas independientes acceder a diputaciones y senadurías de representación proporcional. Lo que falta, en todo caso, es voluntad política para hacerlo.

En este trabajo hemos analizado la disponibilidad y acceso de un derecho fundamental, que es el derecho a ser votado, sin más, sin necesidad de formar parte de un partido político. Este derecho quedó a disposición de toda la ciudadanía mexicana en la reforma de 2012, pero la realidad es que los requisitos impuestos en las leyes secundarias cierran el paso a millones de personas de manera que solo unos cuantos con acceso a suficiente capital social y económico pueden pasar de meros aspirantes a convertirse en candidatos registrados; y de éstos, solo unos cuantos lograrán atraer los suficientes sufragios que les den el triunfo. De esta manera, las candidaturas independientes son un brillante espejismo en un muy lejano horizonte para la mayor parte de la ciudadanía.

A la vez, con tan escasas oportunidades de ejercer efectivamente el poder público ganado por la vía electoral, las candidaturas independientes han tenido escaso margen para mostrar las cualidades o defectos de un gobierno o legislatura encabezado por ciudadanos sin partido. Aunque en este sentido puede mencionarse la gestión poco exitosa del gobernador independiente de Nuevo León, se trata solo de un caso; así como el caso de Kumamoto en el congreso de Jalisco es un ejemplo único de lo que puede hacer un diputado independiente. Difícilmente pueden sacarse conclusiones sobre los beneficios o riesgos de que ciudadanos sin partido ganen cargos públicos vía elecciones. En el caso de los ayuntamientos, que es hasta ahora donde más triunfos han logrado los independientes, hace falta emprender estudios sobre estos gobiernos municipales y comparar sus logros y fracasos con los de alcaldías ganadas por partidos políticos.

En próximas reformas electorales será necesario plantear alternativas encaminadas a hacer posible que esta figura de candidatura independiente permita el efectivo ejercicio de derechos para un mayor número de ciudadanos de a pie interesados en la política y en participar en asuntos públicos. No se trata solo de ser aspirantes, sino de lograr estar en la boleta, y contender con equidad por un cargo público.

Bibliografía

Alianza Cívica Nuevo León (1998) Ponencia presentada por Alianza Cívica Nuevo León al Foro de consulta para la reforma de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. No publicado.

CoIDH (6 de agosto de 2008). Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf

Medellín, Laura (2008). “Las expectativas democráticas en el ascenso del PAN en Nuevo León”, en Cienfuegos, David y Luis Rodríguez (2008), Estado, Derecho y Democracia en el momento actual, Monterrey. Fondo Editorial Jurídico, pp. 251-274.